

Plaza pública

para la edición del 8 de enero de 1995

Poder o no poder

Miguel Ángel Granados Chapa

Si se atiende a una percepción cada vez más extendida de la realidad, que puede no corresponder con la realidad misma, estamos asistiendo a una conversión radical del poder público mexicano. O más exáctamente, del poder presidencial, que estaría pasando de la omnipotencia a la impotencia. A causa de la devaluación y sus secuelas, cunde una sensación de desánimo, completada por la de que el gobierno no encara con suficiencia la crisis en que apenas nos adentramos. Aun el único éxito de la actual estrategia gubernamental, que consiste en conseguir apoyo externo para las dificultades de esta hora, genera a su vez reacciones de inconformidad que puede hacer inaplicables aspectos relevantes del programa de emergencia.

Ese programa no ha suscitado confianza, ingrediente principal de todo acuerdo político. Al contrario, ha sido objetado desde una diversidad tal de miradores, porque afecta intereses o no alienta a los sectores descontentos, que parece impresindible una alternativa. La primera que se ha formulado es la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que incluye la formación de un gabinete "de salvación nacional", apelativo que sobre todo en la historia parlamentaria europea ha sido utilizado para el enfrentamiento de las grandes crisis. La iniciativa de

Cárdenas incluye, junto con esa propuesta de recomposición política, medidas de carácter económico, algunas ya expresadas durante su campaña electoral y aun mucho tiempo atrás, así como otras que juzga precisas ante las urgencias de hoy.

Igualmente, de manera larvada e inasible, pero insoslayable, han comenzado a circular referencias al Ejército como factor de corrección política. Asumen diversas modalidades, desde el amenazador rumor de un golpe militar, al estilo de los que fueron frecuentes al sur de nuestra frontera, hasta la reflexión de apariencia teórica que busca un centro de decisiones irrebatibles que ponga orden donde se está instalando su contrario.

No parece tratarse, hasta ahora, de rumores filtrados desde las estructuras militares. Es verdad que de tiempo atrás se conocen expresiones de desacuerdo entre ciertos mandos castrenses con el manejo de la política, amén de inconformidades con la propia suerte de las fuerzas armadas, cuyos haberes han sido muy castigados, sobre todo en los niveles medios e inferiores. No se puede ignorar, tampoco, que el narcotráfico ha permeado de varias formas y en diversos niveles al Ejército y a la Armada, y que esa perniciosa presencia constituye un elemento que adultera la misión de esas corporaciones. La tensión, en fin, a que han estado sometidas las tropas en Chiapas, y las apreciaciones militares sobre la situación política en esa entidad, no ayudan a la tranquilidad en el seno de las fuerzas armadas. Todo lo anterior haría "normal" o "esperable" que la inquietud de círculos militares se empatara con la que se va

extendiendo en el resto de la sociedad ante la difícil coyuntura que enfrentamos. Hasta ahora, no ha habido mecanismos de articulación entre militares y grupos sociales que encontraran sustento a sus acciones en la fuerza castrense. Pero ya no se puede asegurar enfáticamente, como se hizo durante décadas con intenciones exorcizadoras, que es imposible una movilización militar del Ejército por su propia cuenta, al margen y aun en contra de las instituciones civiles. Ignoro si objetivamente un fenómeno de esa naturaleza puede ocurrir en el corto plazo, y qué reacción provocaría en la sociedad. Lo que digo es que hoy se habla de esa posibilidad, y eso indica sobre todo la necesidad de una alternativa. Por supuesto, no vacilo en afirmar desde ahora que ese remedio sería peor que la enfermedad, que debemos prevenirnos contra esas tentaciones y que un modo de hacerlo es explicitar esos hechos, como lo hago aquí ahora, en vez de mantenerlos en el rincón de los susurros y los rumores.

Un saludable proceso análogo, de conversión de las murmuraciones en denuncias públicas, susceptibles de tener un tratamiento jurídico y de política abierta, ha tenido lugar en torno a las responsabilidades del Presidente Salinas en el manejo de la economía. Quizá no hay posibilidad legal de que se instaure contra el ex Ejecutivo federal un juicio político como lo ha demandado el Partido de la Revolución Democrática, y acaso ni siquiera por la vía penal sea viable un enjuiciamiento en su contra. Pero del escrutinio severo de la opinión pública sobre su actuación, ya no podrá

escapar el candidato mexicano a la dirección de la Organización Mundial de Comercio. Tal vez tampoco pueda eludir averiguaciones sobre negocios en que haya tomado parte por sí o por interpósitas personas, todo lo cual conviene al propósito desacralizador de la figura presidencial, que es uno de los requisitos de la evolución democrática de México. Esa desacralización, sin embargo, implica el riesgo, por lo menos en esta coyuntura, de dar paso al oportunismo y a la simulación.

En efecto, en la reciente andanada de expresiones críticas contra el ex Presidente Salinas se puede advertir la presencia de por lo menos tres clases de juicios. Corresponde a la primera la de quienes fueron sus impugnadores contumaces, y no dejaron de señalar los errores de la política económica desde su embrión, es decir desde que fue diseñada y a lo largo de su puesta en práctica. Pertenecen a la segunda la de quienes, honestamente y con buena fe, se sorprenden al conocer ahora que la política que aplaudieron hasta el paroxismo se fincaba en el ocultamiento de datos y en el maquillaje de las consecuencias, y hoy agregan a su pesar por los daños materiales de la devaluación y sus secuelas, el resentimiento por el engaño sufrido. E integran la tercera clase los oportunistas que conocieron y aun se beneficiaron de aquella política económica y por lo tanto la aprobaron ruidosamente, y hoy se desgarran las vestiduras, en un alarde de indignación. Pero como es imposible separarlas en comportamientos estancos, esas varias maneras de manifestarse contra la pasada gestión

presidencial confluyen en el saludable efecto de impedir la irresponsabilidad gubernamental.

Ese ejercicio, sin embargo, no puede limitarse a juzgar los hechos pasado, cuando no tienen corrección posible. Debe ejercerse a tiempo, mientras los sucesos ocurren. Por eso es de atender el programa enunciado por el ex candidato presidencial del PRD, que incluye por ejemplo establecer una moratoria en los pagos de intereses y principal de las varias formas de deuda contraída por el gobierno. Si no se actúa de inmediato en ese terreno, el sacrificio a que ha llamado el Presidente Zedillo puede ser infructuoso. Sólo en el rubro de los Bonos de la Tesorería, los Tesobonos denominados en dólares, habría eventualmente que reembolsar a sus tenedores este año el equivalente a 29 mil millones de dólares, amén de los vencimientos de la deuda pública externa. Al mantener intactos esos compromisos, se diluirán los nuevos créditos que la comunidad financiera internacional se apresta a otorgar a México. Y más tarde estaremos simplemente lamentando el crecimiento de nuestras obligaciones frente al exterior, situados en una posición todavía más frágil que la de hoy.

Al formular su programa alternativo, Cárdenas ha recordado las advertencias que hizo hace casi tres años, el 5 de febrero de 1992, y que ahora se han cumplido cabal y desgraciadamente. En aquel entonces lanzó juicios muy severos sobre el Presidente Salinas, que sus colaboradores y corifeos reprocharon a Cárdenas y hasta atribuyeron a eso que llamaron ex abrupto la interrupción de un imaginario acercamiento entre el

gobierno y el PRD. Más que el entorno de ese episodio, lo que importa hoy es tener presente la existencia de señales claras en aquel entonces sobre la vulnerabilidad de la economía mexicana, su exagerada dependencia de la inversión foránea y la ampliación del déficit en la cuenta corriente por el desaforado crecimiento de las compras al exterior:

Dijo Cárdenas hace más de mil días:

"Los controles oficiales y su subordinación al extranjero han hecho que la ineficiencia de la economía crezca exponencialmente, así como su inabilidad para competir internacionalmente. Es la crisis de la descapitalización del país, por el abandono y deterioro de la infraestructura de las comunicaciones y los servicios sociales y el despilfarro del ahorro nacional en los apoyos oficiales a las importaciones suntuarias de los muy pocos, y de la chatarra que destruye la agricultura, la industria y la capacidad productiva nacionales..."

"El desquiciamiento al que conduce esta política es cada vez más claro. Apunta a una ruptura de la estabilidad monetaria más drástica que la ocurrida en las administraciones anteriores, cuando se derrumbó el espejismo oficial sobre la firmeza del peso..."

"La estabilidad de la economía está en manos de los especuladores y se hará insostenible cuando ellos decidan que los daños de la política oficial les resultan tan insoportables que impongan una nueva devaluación del peso y restricciones sociales y cargas más pesadas al pueblo en su conjunto".

Vista la exactitud con que esos pronósticos se cumplieron, sería irresponsable soslayar las nuevas formulaciones de Cárdenas, que insta al Presidente Zedillo a "un relevo total de su equipo de gobierno" para la recuperación de la confianza. No digo que sus llamamiento deba ser atendido mecánicamente. Digo que la construcción de las soluciones no puede ignorar lo expresado por un dirigente político que ha practicado una diligente lectura de los acontecimientos nacionales. Hay que reparar, asimismo, en la prudencia de Cárdenas respecto de la figura presidencial. Si bien formula como una posibilidad para salir de la crisis la renuncia de Zedillo y la convocatoria a nuevas elecciones, no la presenta como la alternativa inmediata, como cabría imaginar en quien impugnó a través de todos los medios la justeza de los comicios del 21 de agosto pasado. Es decir, no se trata de una actitud revanchista que quiera montarse en la emergencia para volver a la carga del cuestionamiento electoral, sino de la exploración de los diversos caminos que propicien la "salvación nacional".

No es exagerado hablar en esos términos, porque en efecto la vida republicana está en peligro. Es posible conjurar ese riesgo mediante el ejercicio de la política. La distensión en Chiapas está comprobándolo. Una nueva tregua por parte del zapatismo armado se inició ayer sábado y se extenderá hasta el 12 de enero, aniversario de la que puso fin a los enfrentamientos de los primeros días del año pasado. En respuesta a la decisión zapatista, el gobierno federal dispuso que el Ejército mexicano se replegará en Sabanilla, lo que

también resulta una consecuencia del reproche formulado por el EZLN respecto de que "las fuerzas gubernamentales no han cumplido la orden de no realizar avances en sus posiciones".

La distensión propiamente bélica no se extiende necesariamente al resto de los frentes abiertos en Chiapas. Tapachula, por ejemplo, fue escenario el viernes de un enfrentamiento violento ordenado sin tener en cuenta la delicadeza de la situación. Miembros de la Coalición Obrero, Campesina y Estudiantil del Soconusco entraron a la alcaldía de aquella ciudad fronteriza como parte de sus movilizaciones en pro de la renuncia del gobernador Eduardo Robledo, en que coinciden con la Asamblea estatal democrática del pueblo chiapaneco. Antes de un cuarto de hora, la fuerza policiaca de la municipalidad entró al palacio municipal y desalojó a los ocupantes, con uso de armas, lo que provocó heridas de bala a una persona y golpes a medio centenar. Otro tanto quedó detenido después de ese incidente que, por haber ocurrido en Día de Reyes y ante una plaza principal pletórica de personas ajenas a esos hechos, pudo haber generado consecuencias incalculables. Si no la prudencia, al menos la memoria debió haber impedido la apelación inconsulta de la fuerza pública en ese lugar: allí mismo, el 31 de diciembre de 1946, en un enfrentamiento semejante, murieron varias personas que protestaban, como ahora, por el resultado de unas elecciones. El gobernador Juan Esponda tuvo que marcharse, en los primeros días de

1947, como consecuencia de aquella agresión a los opositores a una imposición antidemocrática

No es sensata política atacar así a los disidentes. Tampoco lo es encarcelarlos. De allí que sea compatible enteramente la postura de intelectuales y artistas como Elena Poniatowska, Mariclaire Acosta, Jesusa Rodríguez, Romana Falcón, Carlos Monsiváis, Lorenzo Meyer, Rius, Rogelio Naranjo, Sergio Aguayo y otros más que piden liberar a 36 presos en Tabasco, en su mayoría indígenas chontales. Fueron aprehendidos en su movilización postelectoral. Son por lo tanto presos políticos. Por lo tanto, deben quedar en libertad.

INSERTAR

IMAGEN

PDF